

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



JUZGADO SEGUNDO (2º) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

EXPEDIENTE	11001-33-35-027-2019-00204-00
DEMANDANTE	MARTHA LIGIA PEÑA RODRÍGUEZ
DEMANDADO	NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

CUESTIÓN PREVIA:

El artículo 155 numeral 2 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad sin atención a su cuantía.

Por otra parte, a través del Acuerdo PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022¹, se dispuso, entre otras cosas, la creación de tres (3) juzgados administrativos transitorios en el Circuito de Bogotá cuya competencia comprende las reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por servidores públicos de la Rama Judicial y con régimen similar.

En razón de lo anterior, por medio del oficio CSJBTO22-817 del 24 de febrero de 2022 emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá se estableció que al Juzgado Segundo (2º) Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá le correspondía asumir el conocimiento de los procesos originarios de los Juzgados Administrativos 19 a 30 del Circuito de Bogotá.

¹ «Por el cual se crean unos cargos con carácter transitorio para tribunales y juzgados a nivel nacional».

De igual manera, mediante Circular CSJBTC22-29 del 27 de abril de 2022, se dispuso que este Despacho también asumiera el conocimiento de los procesos provenientes de los Juzgados Administrativos 1º, 2º, 31, 34, 35, y 58 del aludido circuito.

Así las cosas, y en atención a los referidos parámetros de competencia, y reparto, se avocará el conocimiento del presente asunto y proferirá la decisión que en Derecho corresponda.

ANTECEDENTES:

Una vez analizado el material probatorio aportado al expediente, se observa que, mediante petición del 29 de septiembre de 2017 (fs. 48 a 50 cuaderno ppal.), se solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013, como remuneración mensual con carácter salarial.

En tal sentido, mediante oficio 20175920006251 del 13 de octubre de 2017 (fs. 28 a 31 cuaderno ppal.), la Administración negó solicitud la formulada, e indicó que contra la mencionada decisión, procedían los recursos previstos en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, decisión frente a la cual, no se interpuso ningún recurso.

Posteriormente, en escrito del 21 de febrero de 2019 (fs. 21 a 24A cuaderno ppal.), la actora deprecó nuevamente el reconocimiento de la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013, petición que fue atendida desfavorablemente a través de la comunicación 20195920002751 del 28 de febrero de 2019 (fs. 27 y 27 vuelto cuaderno ppal.), teniendo en cuenta que dicha solicitud ya había sido resulta anteriormente por medio del oficio 20175920006251 del 13 de octubre de 2017 (fs. 28 a 31 cuaderno ppal.), por lo que no se emitió ningún pronunciamiento de fondo.

De igual manera, se tiene que, a través de memorial del 18 de marzo de 2019, una vez más, la demandante pidió el reconocimiento de la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013 (fs. 33 a 40 cuaderno ppal.), solicitud que fue resuelta de manera negativa mediante la comunicación 2019592004931 del 4 de abril de 2019 (fs. 41 y 42 cuaderno ppal.), puesto que la Administración ya

había decidido negar el aludido requerimiento prestacional por medio del oficio 20175920006251 del 13 de octubre de 2017 (fs. 28 a 31 cuaderno ppal.), ,motivo por el cual, no se emitió ningún pronunciamiento de fondo.

CONSIDERACIONES:

El numeral 2º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

«2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral» (negrita fuera del texto original).

Así las cosas, se concluye que, en el caso bajo consideración, no se acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad contemplado en la citada normativa, puesto que, del material probatorio aportado, no se evidencia que la interesada hubiese interpuesto el recurso de apelación dentro del término legal establecido en contra del oficio 20175920006251 del 13 de octubre de 2017 (fs. 28 a 31 cuaderno ppal.), máxime, cuando dicha impugnación era obligatoria en virtud del artículo 76 de la referida codificación², puesto que dicho acto administrativo fue el que decidió de manera definitiva los factores salariales y emolumentos a los que tenía derecho aquella por su tiempo de servicios con la entidad demandada

En este orden de ideas, comoquiera que el acto administrativo controvertido no es susceptible de control judicial, toda vez que contra la comunicación 20175920006251 del 13 de octubre de 2017 no se interpuso la impugnación necesaria, en virtud del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo³, se rechazará la demanda formulada.

Por otra parte, en lo referente a la pretensión de nulidad de las comunicaciones

² «...El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción».

³ «...Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

(...)

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial».

20195920002751 del 28 de febrero de 2019 (fs. 27 y 27 vuelto cuaderno ppal.) y 2019592004931 del 4 de abril de 2019 (fs. 41 y 42 cuaderno ppal.), se advierte que dichos actos administrativos no son definitivos en la medida que la Administración no concedió una respuesta de fondo a lo deprecado debido a que dichas solicitudes, es decir, el reconocimiento de la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013 como remuneración mensual con carácter salarial, ya había sido atendida a través del oficio 20175920006251 del 13 de octubre de 2017, decisión frente a la cual, se reitera, no se interpuso la respectiva impugnación por parte de la interesada.

Al respecto, es preciso destacar que doctrinariamente⁴ se ha entendido el acto administrativo como toda declaración de voluntad unilateral por parte de la Administración en ejercicio de su función administrativa, la cual genera efectos jurídicos sobre un asunto determinado. Asimismo, jurisprudencialmente⁵ se ha concluido que «...los actos administrativos objeto de control de legalidad por la vía jurisdiccional son aquellos que ponen término a un proceso administrativo»⁶.

En tal sentido, el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé que los actos definitivos son «...los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación».

Por tanto, las decisiones de la Administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo o los actos de trámite que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de control judicial por parte de esta jurisdicción⁷.

Ahora bien, es preciso destacar que no en todos los casos se emiten actos administrativos que son susceptibles de impugnación, ya sea a través de

⁴ Consultar Parejo, L. (2011). *Lecciones de Derecho Administrativo*. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, y Sayagues, E. (2002). *Tratado de Derecho Administrativo*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.

⁵ Confer sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 11 de diciembre de 2013, expediente 41001-23-33-000-2012-00086-01, y 7 de abril de 2011, expediente 25000-23-25-000-2010-00152-01.

⁶ Sentencia de 14 de agosto de 2014, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala, expediente 25000-23-24-000-2006-00988-01.

⁷ Ver sentencia de 1º de noviembre de 2012, Consejero Ponente Hugo Fernando Bastidas Barcenás, expediente 25000-23-27-000-2007-00251-01.

recursos⁸ o ante la jurisdicción contenciosa administrativa, dichas decisiones han sido denominadas doctrinariamente como actos no decisorios⁹, simples¹⁰, declarativos¹¹ de cumplimiento o ejecución.

En este orden de ideas, se observa que las comunicaciones 20195920002751 del 28 de febrero de 2019 (fs. 27 y 27 vuelto cuaderno ppal.) y 2019592004931 del 4 de abril de 2019 (fs. 41 y 42 cuaderno ppal.), se limitó indicarle a la peticionaria que no era dable emitir nuevamente un pronunciamiento respecto de la prestación social deprecada.

Por último, se reconocerá a la abogada Saudí Stella López Suárez, identificada con cédula de ciudadanía 52.323.491 y tarjeta profesional 127.800 del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo canal digital de notificaciones inscrito en el Registro Nacional de Abogados es toscanasaudi@yahoo.es; para representar a la parte demandante en los términos del poder conferido (fs. 18 y 19 cuaderno ppal.).

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO (2º) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: AVOCAR el conocimiento del presente asunto, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: RECHAZAR la demanda presentada por el señor Martha Ligia Peña Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía 51.615.989, quien actúa a través de apoderada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER los anexos del expediente de la referencia sin necesidad de desglose.

⁸ Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

⁹ Sánchez, M. (2015). *Derecho Administrativo Parte General*. Madrid: Tecnos (Grupo Anaya SA).

¹⁰ Penagos, G. (2008). *El Acto Administrativo Tomo II Parte Especial Nuevas Tendencias*. Bogotá D.C.: Doctrina y Ley Ltda.

¹¹ Parejo, L. (2011). *Lecciones de Derecho Administrativo*. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Saudí Stella López Suárez, identificada con cédula de ciudadanía 52.323.491 y tarjeta profesional 127.800 del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo canal digital de notificaciones inscrito en el Registro Nacional de Abogados es toscanasaudi@yahoo.es; para representar a la parte demandante en los términos del poder conferido.

QUINTO: ADVIÉRTASE que se deberán allegar todas las comunicaciones y documentos que se pretendan hacer valer dentro del caso bajo consideración únicamente a la siguiente dirección de correo electrónico: correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

De igual manera, deberán atender los parámetros previstos en el artículo 78 del Código General del Proceso, so pena de la sanción allí prevista.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:
Francisco Julio Taborda Ocampo
Juez
Juzgado Administrativo
002 Transitorio
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 4393da0c1894284ed2d5307ac1db6a6c7049a28d03bdd594b333e4a60605a10e

Documento generado en 17/11/2022 08:17:18 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>